



Santiago de Cali, agosto 29 de 2023

**SEÑORES**  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CAUCA**  
**GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**  
**E. S. D.**

**REFERENCIA: PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISACAL PRF-2019-00858**

**GERMAN ANDRES RODRIGUEZ ORTIZ**, persona mayor de edad, identificado con la C.C. No. 79.593.084, en mi calidad de apoderado de la firma **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS**, ente de derecho privado identificado con Nit No. 800.093.266-2, representado legalmente por el señor **FABIAN GARCIA RIOS**, identificado con cedula de ciudadanía número 16.694.142 de Cali, y como abogado del señor **FABIAN GACIA RIOS** persona natural identificado con la C. C. No. 16.694.142 de Cali, partes vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal de la referencia, a ustedes con el mayor de los respetos y estando dentro del término y oportunidad respectivos procedo a interponer recurso de reposición en subsidio el de apelación en contra del auto 427 del 16 de agosto de 2023 notificado por estados del 23 de agosto de la presente calenda y de conformidad a las siguientes consideraciones:

1.- Que en el auto objeto de la presente alzada se niega la nulidad interpuesta y además se niegan los elementos de prueba solicitados como derecho a la contradicción respecto del auto de imputación y se decide curiosamente compulsar copias contra la **Dra CLAUDIA INES PABON MOSQUERA** Representante Legal de la **SOCIEDAD ROCALES Y CONCRETOS SAS** por el presunto delito de **FRAUDE PROCESAL**, persona esta que ni siquiera es parte de esta actuación.

Es menester indicar que claramente esta Contraloría viene mostrando una postura agresiva e irrespetuosa para con mis representados a quienes se les viene vulnerado sin justificación alguna su derecho a la defensa y contradicción el cual es de arraigo constitucional y apartándose de los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, dignidad humana y presunción de inocencia, adentrándose al campo de las vías de hecho, denegación de justicia, prejuizgamiento y violación del principio de legalidad.



A lo largo de toda esta actuación mis prohijados han sido sometidos a todo tipo de vulneración de sus derechos fundamentales lo cual ampara el trato indignante y discriminatorio al que me vengo refiriendo en clara conculcación del derecho fundamental de igualdad aparado en el apartado 13 de nuestra carta.

Como esta visto hasta la presente los funcionarios a cargo de este trámite están lejos de los postulados del debido proceso olvidando que en este tipo de actuaciones el principal elemento del debido proceso es el derecho a contradecir y a poder defenderse aparte este que una y otra vez les ha sido cercenado el derecho a la defensa, primero desconociendo una conciliación judicial que tramitada ante una procuraduría y luego avalada por un tribunal administrativo dio tránsito a cosa juzgada, posteriormente se adelanto este proceso sin presencia de mis clientes por actos de indebida notificación y nombramiento de abogado de oficio que para nada defendió a mis clientes en su ausencia en clara vulneración del principio de defensa técnica para rematar con la denegación de las pruebas solicitadas en la contestación del auto de imputación.

Como se puede ver estamos es frente a un monologo procesal que para nada protege los intereses constitucionales de las partes en este proceso, olvidándose de que Colombia no es un Estado fallido o anárquico si no que es un Estado Social de derecho donde priman los derechos fundamentales de las personas en especial el debido proceso y es por ello que vemos con preocupación e impotencia el objetivo perseguido en este trámite como quiera que esta Contraloría ya está en un claro acto de prejuzgamiento que sin mediar palabra y claro autoritarismo y por mas que digamos y nos defendamos terminará en la declaratoria de responsabilidad fiscal.

Que es tan lamentable esta situación que este ente público de control fiscal apartándose de los lineamientos expuestos en el articulo 1 y 2 de nuestra norma superior en ves de prohijar un justo debate procesal decide imponerse con actos de amedrantamiento como la compulsa de copias por presunto delito de fraude procesal respecto de una persona (**CLAUDIA INES PABON MOSQUERA**) y una sociedad (**ROCALES Y CONCRETOS SAS**) que ni siquiera son parte de este proceso o tienen interés en as resultas del mismo y todo por un error cometido por este servidor al enunciar equivocadamente en el escrito de respuesta al auto de imputación que actuaba a nombre de esta sociedad de la cual también soy su abogado de confianza, es decir que valiéndose del error humano arremeten contra quien no es parte en este asunto y con la tranquilidad meridiana se atenderán las actuaciones que devengan de ello.

2.- Como ya se dijo esta contraloría arrima a su decisión una serie de información periodística sin confirmación al amparo de la ley recordando que en Colombia las sociedades son de carácter legal.



En efecto, no puede ser que esta Contraloría y sus funcionarios de quienes se presume conocen el derecho, se les olvide que en Colombia la realidad legal de una sociedad y sus accionistas, dueños o cuota habientes se determina en los instrumentos legales existentes y en sus composiciones accionarias que se encuentran regladas en este país luego no puede ser serio que porque una nota periodística entregue información de posibles negocios entre **ROCALES Y CONCRETOS SAS** y **GARCIA RÍOS CONSTRUCTORES SAS**, esto signifique que según el pensar de esta contraloría las dos sociedades en comento son lo mismo, lo cual está lejos de toda realidad legal.

Lo anterior significa que según criterio de esta contraloría solo bastaba una información bajada de la nube informativa de Google, o Facebook, o tictok o cualquier medio electrónico para establecer como verdad lo que indican los medios informativos electrónicos, es decir, como hizo esta contraloría para verificar la veracidad de esos comentarios o informativos, cual es el elemento material probatorio que probó que esa información era verídica, como comprobó los componentes accionarios para arribar a esa realidad de indicar que el Ingeniero **FABIAN GARCIA RIOS** tenían injerencia en la firma **ROCALES Y CONCRETOS SAS**.

A su turno señala esta Contraloría en su juiciosa y de paso manipulada investigación que pudo verificar lo siguiente:

***17. Autorizar al gerente para que la sociedad pueda constituirse en garante de las obligaciones de las sociedades que sean o lleguen a ser accionistas de la sociedad, con el voto favorable de uno o más accionista que represente al menos el sesenta por ciento (60%) de las acciones suscritas de la compañía, más voto favorable del señor FABIÁN GARCIA RÍOS si fuere socio de la compañía sin importar el número de acciones que sea titular.***

Con base a esta imagen aparece la obligatoria pregunta que busca obtener como respuesta el que no se avizora por ninguna parte del expediente que esta contraloría probó que el señor **FABIAN GARCIA RIOS** era socio de **ROCALES Y CONCRETOS SAS** pues no está el documento idóneo que de conformidad a la ley lo pruebe o como hizo para determinar esa realidad y no por conjeturas del medio electrónico pueda validarse como lo señala esta entidad que el señor **FABIÁN GARCIA RÍOS** está directamente relacionado con **ROCALES Y CONCRETOS**.



En gracia de discusión, si fuera cierto que el señor **FABIAN GARCIA RIOS** fuera socio de **ROCALES Y CONCRETOS SAS** o tuviera relación directa con esta sociedad, que norma o jurisprudencia autoriza que por estos simples hechos y comentarios informativos se podía desconocer la normatividad procesal que regula las notificaciones en este tipo de procesos.

Es claro en este punto que este proceso se adelanta en contra de **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS, FABIAN GARCIA RIOS, EDUARDO GIRONZA LOZANO** y otros, pero ni por asomo este proceso se sigue en contra de la **SOCIEDAD ROCALES Y CONCRETOS SAS**, luego que ley, norma o jurisprudencia establece que por el hecho de que presuntamente **FABIAN GARCIA RIOS** es accionista de **ROCALES Y CONCRETOS SAS** o tiene relación directa con esta sociedad, esta Contraloría estaba habilitada para notificar a **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS** y **FABIAN GARCIA RIOS** en las instalaciones de **ROCALES Y CONCRETOS SAS** o que esta Contraloría en despliegue de su poder podía utilizar de mensajera o dependencia de mensajería a **ROCALES Y CONCRETOS SAS** para a través de ella notificar a **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS** y **FABIAN GARCIA RIOS**, recordando que estamos hablando de personas jurídicas y naturales diferentes y con autonomía e independencia entre ellas, lo que a las claras demuestra la falta de parcialidad y objetividad y de que se esta vulnerando el debido proceso, ya que basados en conjeturas improbadas se quebranta el régimen procesal y se asume una postura claramente prejuzgativa lo cual es bastante delicado de por sí.

Finalmente dentro de las tan admiradas notas de relatoría periodística de origen electrónico al parecer, se habla de una serie de Consorcios y negocios donde participan **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS, ROCALES Y CONCRETOS SAS** y otras sociedades incluso, esta contraloría en un acto sin precedentes pretende injuriar indirectamente estas relaciones comerciales tratando de mandar un mensaje negativo respecto de la imagen comercial y de negocios de las sociedades aquí mencionadas, de igual forma que Ley o norma o Jurisprudencia o que postulado ordenado por esta Contraloría prohíbe en Colombia que las sociedades puedan conformar **CONSORCIOS**, a lo que se suma el hecho de que no conocemos que Ley, norma Jurisprudencia o postulado creado por esta Contraloría prohíba en Colombia que los cónyuges o compañeros puedan tener sociedades de forma independiente, la verdad este si es un acto de deslealtad procesal y de claro prejuzgamiento que apunta a sustentar la tesis de que a esta Contraloría no le interesa impartir justicia solo procederá a sancionar sin importar absolutamente nada.

Lo cierto es que, el deber funcional y procesal de esta Contraloría era notificar en debida forma a las partes involucradas a los sitios autorizados para ello en las cámaras de comercio conocidas de autos y no utilizar caminos o procedimientos ilegales para justificar una notificación y tampoco



pretender sustentar que porque **FABIAN GARCIA RIOS** es esposo de **CLAUDIA INES PABON MOSQUERA** entonces ustedes estaban habilitados a notificar **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS** y a **FABIAN GARCIA RIOS** en las instalaciones de **ROCALES Y CONCRETOS SAS**, recordando que la responsabilidad en todas las materias es intuición persona y cada quien responde por lo que le corresponde.

2.- En cuanto al tema de la negación de la práctica de pruebas en la etapa de imputación de responsabilidad fiscal nuevamente se vulnera el debido proceso en esta actuación ya que esta Contraloría establece una tarifa legal amparándose en el Código General de Proceso olvidándose que la Ley 610 de 2000 en sus artículos 22 y siguientes regula la materia de las pruebas en este tipo de actuación y por tanto es dicha norma la que gobierna el procedimiento fiscal y no el C. G. P.

Bajo este precepto los artículos 24 y 25 de la Ley 610 de 2000 con suma claridad establecen la posibilidad de pedir y aportar pruebas y la libertad de prueba en aras de poder esclarecer los hechos y poderse defender en ejercicio al derecho de contradicción y debido proceso.

Desde este punto en el auto de imputación se establecieron con claridad los elementos de descargo en donde se deja definido con claridad por qué no le asiste responsabilidad a mis clientes frente a los cargos que se les endilga por parte de esta entidad y se señala que el error que dio lugar al presunto daño patrimonial se originó en la entidad bajo censo (movilidad futura) y en los funcionarios que tuvieron que ver con la aprobación de la audiencia de conciliación conocida de autos en especial quienes conformaron el comité de conciliación prejudicial comentado en este asunto, a los abogados que participaron en la audiencia de conciliación a nombre de movilidad futura y a quien fungió en dicha época como gerente y representante legal de esa entidad y de allí que se pidió la prueba testimonial para que estos aclaren los hechos de esta investigación en especial en lo referente a la forma en como se tramita la conciliación prejudicial, como se realizaron las valoraciones de los insumos, quien definió el precio de la conciliación, que tuvieron que ver en dichas decisiones mis clientes y en fin sencillamente era el momento de defensa de mis clientes bajo la metodología y estrategia de defensa a mi cargo lo cual no puede manipular ni direccionar esta contraloría mientras lo que pida sea conducente como en efecto lo es.



Ahora bien estos funcionarios aparecen en las pesquisas adelantadas por esta contraloría luego por economía procesal y como se conocen de autos no tenia el porque relacionarlos pues indique en la solicitud a que funcionarios me refería y cuyos nombres y direcciones los conoce la entidad involucrada y muy difícilmente de nuestra parte podremos saber su ubicación lo cual si lo sabe **MOVILIDAD FUTURA SAS**, luego pegarse de formalismos a sabiendas de que mi petición era valida y conducente es denegar justicia y esas declaraciones sustentarían los argumentos de defensa y descargos y de allí el porque se pidieron.

*“2.1.- A todos los funcionarios que tuvieron que ver con la aprobación de la audiencia de conciliación conocida de autos en especial quienes conformaron el comité de conciliación prejudicial comentado en este asunto, a los abogados que participaron en la audiencia de conciliación a nombre de movilidad futura y a quien fungió en dicha época como gerente y representante legal de esa entidad para lo cual solcito se oficie a movilidad futura para que alleguen la lista y nombres de los funcionarios que se indica en este punto para que sean llamados a declarar.”*

En cuanto a la solicitud de oficiar a la **PROCURADURÍA 73 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE POPAYÁN**, para que alleguen con destino a este proceso copia completa del expediente de la conciliación prejudicial que entre las partes aquí cuestionadas se celebró en dicho asunto en el evento de que dicho material probatorio no haga parte de este negocio, estoy conforme con la decisión, mas no comparto la solicitud de haberse no haberse oficiado a este despacho del ministerio público a fin de que indiquen quien fungía como titular de esa cartera y si la persona sigue siendo funcionaria de esa entidad y de verificar de que si sigue laborando en esa dependencia se la cite a declarar en este proceso sobre los hechos relativos a la conciliación que se llevó a cabo y que está dando lugar a hechos relativos a este proceso, declaración que sustentaría los argumentos de defensa y descargos bajo en el entendido de que la decisión de conciliar y fijar el quantum de la conciliación se produjo de parte de **MOVILIDAD FUTURA SAS** y en dicha decisión nada tuvo que ver mis clientes realidad que solo lo puede probar la funcionaria que impartió la aprobación a esa conciliación.



En cuanto a la declaración del Señor **GUSTAVO ALEJANDRO GIRONZA VILLALBA** identificado con C. C. No. 14.637.184 se indicó que este testigo que estuvo presente el día que los funcionarios de movilidad futura decidieron adelantar la valoración de los bienes objeto de este debate y su deposición era valiosa para confirmar que los precios de los insumos y el conteo de los mismos para establecer el valor de recibo de los mismos lo realizaron ellos sin presencia de mis clientes prueba conducente y legal.

Debemos recordar que sobre la etapa procesal correspondiente a la imputación de responsabilidad fiscal (que es una etapa procesal) que finaliza con el acto administrativo de sanción fiscal que admite recursos, el artículo 50 de la ley 610 de 2000 establece:

*“Artículo 50. Traslado. Los presuntos responsables fiscales dispondrán de un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la notificación personal del auto de imputación o de la desfijación del edicto para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. Durante este término el expediente permanecerá disponible en la Secretaría.”. (subrayas fuera del texto).*

Como se observa de lo dicho en precedencia es claro que en esta etapa se pueden pedir la práctica de pruebas para poder ejercer el derecho de contradicción recordando el principio de libertad de prueba antes expuesto y que contiene el estatuto contenido en la Ley 610 de 2000 y que se expuso renglones que preceden.

En ese orden de ideas y recordando que Colombia es un país garantista a partir del principio de legalidad que aflora en el artículo 29 superior, es claro que en este tipo de actuaciones en materia procesal es obligado respetar el derecho sustancial sobre la formalidad y en ello es claro que las pruebas solicitadas son el único argumento en este caso para poder desvirtuar en señalamiento condenatorio que desde el inicio de este proceso a fulminado esta contraloría en claro despliegue de vías de hecho y actos de prejuzgamiento al indicar que los valores de conciliación que redundaron en el acuerdo conciliatorio fueron propuestos por mis clientes lo cual es falso de falsedad absoluta y esta entidad viene evitando a toda costa que esa verdad emerja ya que como se viene sosteniendo en la conciliación se pactó un precio de arreglo de diferencias económicas contractuales a partir de una propuesta final presentada por los funcionarios de **MOVILIDAD FUTURA SAS** quienes si se equivocaron dicha situación no puede ser trasladada a mis clientes pues dicho error no surge y no fue inducido por mis patrocinados.



En ese orden de ideas es claro que el derecho a la contradicción y practica de las pruebas solicitadas y por las cuales aquí replico están más que avaladas procesalmente, pues esto no se trata de que como esta Contraloría ya practico unas pruebas donde se obtuvo unos resultados suficientemente claros para esta entidad, ahora nuestras solicitudes procesales no son conducentes lo cual es una clara violación al debido proceso ya que una cosa es lo que piensa esta Contraloría en su teoría del caso y otra es nuestro pensamiento que solo busca en derecho a la defensa contradecir la tesis de la este de control fiscal y tratar de demostrar el yerro que están cometiendo.

Por su parte, si aquí se trata que solo vale lo que en pruebas y valoraciones probatorios decreta y practique esta Contraloría cercenando el derecho de los investigados a defenderse, entonces nada que hacer y pues deberían acabar el juego y proceder a sancionar evitando costos innecesarios si ya tienen claro su objetivo y ya será el Juez de la Republica ante quien se buscara justicia ante el cierre ilegal de defensa que aquí se nos propina.

3.- En cuanto a la negación de la solicitud de ampliación de versión libre de mis prohijados me permito indicar que si bien no puede considerarse este elemento procesal como una prueba, lo que si es cierto tal y como lo reconoce esta contraloría dicho elemento corresponde a un acto de defensa o medio de defensa y por tanto era procedente su declaración ya que luego de haberse surtido la etapa de investigación fiscal afloraron nuevos elementos que esta contraloría valoro para poder fulminar su auto de imputación y por ello es derecho de mis clientes solicitar ser oídos en aplicación de su versión a fin de aclarar esos nuevos elementos y además me gustaría conocer la norma que establece que solicitada y practicada la versión libre este acto o medio de defensa no puede ser solicitado nuevamente recordar que la imputación fiscal es otra etapa del proceso de responsabilidad fiscal y los imputados tienen derecho a defenderse utilizando todos los actos o medios de defensa como es la ampliación de versión libre pues de lo contrario como es que mis clientes se pueden defender bajo lo que parece un nuevo procedimiento sustentado por esta Contraloría, la verdad que la postura de esta entidad es inconstitucional además de ilegal y violatoria del derecho de defensa y contradicen y debido proceso.

Como se ha dicho el derecho de defensa se debe garantizar en cada una de las etapas del proceso de responsabilidad fiscal realidad de la cual no escapa la etapa de imputación de responsabilidad fiscal.





Sobre esto nuestra corte Constitucional en sentencia C- 557 del 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. **MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA** y de vieja data ha manifestado que:

*“La Corte indicó que en los procesos fiscales era necesario asegurar la participación de los imputados en la etapa de investigación (lo cual no estaba contemplado en la ley) para que éstos pudieran ejercer su derecho de defensa y, por esta vía, garantizar la eficiencia y eficacia de la actuación administrativa; en este sentido, se ha sostenido que el derecho de defensa en los procesos por responsabilidad fiscal debe garantizarse en cada una de las etapas del trámite, en forma unitaria, continua y permanente, es decir, tanto en la investigación como en el juicio fiscal.”*

#### **PRETENSIONES**

Por lo expuesto en precedencia me permito solicitar se proceda a revocar el fallo objeto de esta alzada y por ende se ordene a quien corresponda decrete las pruebas solicitadas de nuestra parte y de igual forma se ordene recepcionar la ampliación de versión libre de mis clientes:

**GERMAN ANDRES RODRIGUEZ ORTIZ**  
**C. C. No. 12.995.790 DE PASTO**  
**T. P. No. 153.630 DEL C. S. J.,**